Assumpta Bailac e Hilario Hernández

RECORTES Y OPORTUNIDADES

Las bibliotecas y sus profesionales ante unas elecciones en época de crisis

Se aproximan las elecciones tanto municipales como autonómicas. Todos sabemos que los posibles cambios en las administraciones afectan, de una manera o de otra, a las bibliotecas y sus profesionales. Pero, en época de crisis, con recortes presupuestarios y nuevas prioridades, esos cambios serán aún más acusados y entonces se comprobará la importancia de la biblioteca pública para sus responsables políticos. Mientras, los bibliotecarios no debemos quedarnos parados. Ahora, más que nunca, es cuando tenemos que dar valor al servicio que dirigimos, mostrar su visibilidad y demostrar su función social.

En la próxima primavera habrá elecciones municipales en España y también elecciones autonómicas en un buen número de Comunidades Autónomas; antes, en el otoño, están previstas las elecciones catalanas. Se avecina, pues, un calendario de elecciones que, especialmente en el caso de las municipales, son, sin duda, las que afectan de una manera más directa a la gran mayoría de las bibliotecas públicas en España. Habrá nuevas corporaciones en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales, y nuevos gobiernos en muchas CC.AA.

Como resultado de las elecciones, pueden cambiar los partidos políticos gobernantes; en algunos casos, podrán cambiar tan solo las personas que asumen las responsabilidades políticas para los siguientes cuatro años, aunque se mantenga el mismo partido o coalición al frente de un municipio, diputación o gobierno regional. En todo caso, con cambios de partidos y personas o sin ellos, se iniciará un nuevo mandato en el que los cargos (re)elegidos por los ciudadanos establecerán nuevas políticas, nuevas prioridades, nuevas orientaciones en la prestación de los servicios públicos que la administración establece para el bienestar de la población. ¿Cómo afectarán estas elecciones a las bibliotecas? He aquí un primer motivo para la incertidumbre. Pero no es el único.

Estas elecciones se avecinan en un momento especialmente delicado. La crisis económica en la que se encuentra inmersa España incide e incidirá de manera importante en los servicios públicos. Todas las administraciones atraviesan serios problemas económicos, con drásticas reducciones en los ingresos, obligadas a reducir y controlar el déficit y, en definitiva, con dificultades reales para financiar el gasto que generan sus servicios y proyectos. Se imponen necesariamente recortes que han comenzado ya y que continuarán, al menos, durante el próximo año y que probablemente generen una redefinición a la larga del servicio público.

Ahora bien, estos recortes no se producen con la misma intensidad en todos los servicios o actividades y son lógicamente más importantes en aquellos que se consideran menos necesarios o con menor incidencia en la ciudadanía. Se acentúa así la competencia entre las distintas áreas de la administración, entre los distintos servicios y sus responsables, que tratan de conseguir la menor disminución posible en las asignaciones presupuestarias de manera que el servicio pueda mantenerse con los mismos o mejores parámetros de amplitud y calidad.

Las bibliotecas públicas tienen ante sí un período de incertidumbre que es necesario afrontar. Por un lado, la crisis económica genera dificultades para todos los servicios públicos y, por tanto, también para las bibliotecas. Son momentos en que se podrá ver con claridad la importancia que las diferentes administraciones dan a la biblioteca, en qué grupo de servicios y actividades se la sitúa a la hora de establecer los recortes presupuestarios, dónde están, en definitiva, las prioridades. Por otra parte, con los cambios electorales es razonable que se produzcan también alteraciones en la definición de las políticas públicas, que pueden afectar o, mejor, que afectarán así mismo a la biblioteca pública. Pero, sean por un motivo o por otro, tales cambios pueden y deben tener sus límites; es preciso actuar para que se produzcan dentro de lo razonable. Los bibliotecarios tenemos en estos momentos una tarea que acometer, en una doble perspectiva: reforzar el posicionamiento de la biblioteca ante los cambios políticos y situar la biblioteca ante el nuevo momento económico. Ambas perspectivas, íntimamente relacionadas, deberían servir para configurar una nueva estrategia de futuro para las bibliotecas, redefinición que no solamente viene exigida por las actuales transformaciones que el desarrollo tecnológico está produciendo en la manera en que se genera, accede y usa la información y el conocimiento.

El panorama parece sombrío, pero tiene también elementos positivos que es preciso poner en valor. El desarrollo bibliotecario de los últimos diez o quince años en España ha sido enormemente importante. Son muchas las administraciones locales o autonómicas que han apostado seriamente por dotar a sus ciudadanos de un servicio bibliotecario moderno y adecuado, lo que ha permitido situar a la biblioteca pública en la primera línea de los servicios culturales que presta la administración. Pero, con frecuencia esta transformación no es percibida por la sociedad con todo su calado y extensión. Somos los profesionales de las bibliotecas quienes debemos esforzarnos por dar valor al servicio, por aumentar su visibilidad, por mostrar ante los responsables políticos y ante el conjunto de la sociedad la función social que cumple la biblioteca.

Afrontar un reforzamiento de la posición de las bibliotecas ante los posibles cambios políticos no parece tarea fácil. El desencuentro entre bibliotecarios y políticos es un lugar común que tiene una larga tradición. Por parte de los bibliotecarios se ha puesto de relieve el peso irrelevante o inexistente que las bibliotecas han tenido en los programas electorales; intromisiones dudosamente procedentes de los cargos públi-

cos en el diseño de programas o servicios, o en la selección de libros o prensa; destituciones o cambios de personal discutibles; la escasa dotación económica; el insuficiente papel que se ha otorgado a las bibliotecas en políticas públicas de información; el escaso o desequilibrado reconocimiento profesional del personal… Son factores que en general se sustentan en la falta de consolidación del servicio, en su implantación relativamente reciente (al menos en comparación con el conjunto de los servicios públicos), en la tardía y lenta profesionalización de su gestión (salvo en contados ámbitos y territorios).

El caso es que el sector adolece tradicionalmente de un cierto victimismo que es necesario vencer, no sólo porque en nada ayuda a superar la actual situación y afrontar los retos con mínimas garantías de éxito, sino también porque cada vez se corresponde menos con la realidad. No cabe duda de que aún es mucha la distancia que, en este sentido, separa a las bibliotecas de servicios como los educativos o los de salud, pero si se mira hacia atrás, el camino recorrido es innegable y no tiene vuelta atrás en muchos aspectos. Ahora, más que nunca, es necesaria una actitud decidida y positiva que, tan lejos de vanas utopías como de inoperancias pesimistas, permita generar proyectos bibliotecarios de futuro para el conjunto de la sociedad y, de manera específica, ante los responsables políticos. Se trata de anticipar, en lo posible, las alternativas que, en última instancia, los políticos esperan de los técnicos, es decir, de los profesionales de las bibliotecas. Ante los cambios y posibles nuevas prioridades, hay que avanzar, ser proactivos con nuevas propuestas.

Las bibliotecas públicas tienen ante sí un periodo de incertidumbre que es necesario afrontar: por un lado, la crisis económica; por otro, con los cambios electorales es razonable que se produzcan también alteraciones en la definición de las políticas públicas.

Las decisiones que se tomen sobre las bibliotecas, sean a partir de las dificultades económicas o como consecuencia de los cambios electorales, dependerán fundamentalmente de la imagen que los responsables políticos tengan de las mismas. Y en la creación de esa imagen, el papel de los bibliotecarios es fundamental. Varias son las líneas de trabajo que nos pueden ayudar en esta tarea.

En primer lugar, las acciones de comunicación y la visibilidad de la biblioteca son claves insustituibles. Resulta fundamental mantener una comunicación permanente con los responsables institucionales y otros funcionarios públicos, trasladándoles una información periódica no solo sobre las necesidades de la biblioteca, sino también sobre sus logros. Los buenos resultados de una biblioteca son evidentemente un logro profesional, pero también y en primer término, al menos en su dimensión más pública, un logro de los representantes políticos que tienen la responsabilidad última del servicio. Ofrecer, por ejemplo, una cuidada memoria del mandato que llega a su fin es antes que nada una obligación, además de una ayuda para poner en valor lo conseguido. Es importante, en este sentido, trabajar con estadísticas e indicadores objetivos, que permitan la comparación con estándares o con otras localidades. Hay que explicar los usos de la biblioteca con datos, para demostrar la conexión del servicio con las necesidades reales de la gente y el encaje de nuestras acciones con las prioridades políticas que se establecieron en su momento. Y hay que comunicar a muchos niveles: a los cargos públicos y al resto de servicios y funcionarios, a los usuarios y a los líderes de opinión, a los medios de comunicación y a los colectivos ciudadanos.

La biblioteca ha de ser útil a la comunidad a la que sirve, pero de verdad, no como retórica. Esto comporta dar respuesta a necesidades concretas, reconocibles, tanto en los servicios que se ofrecen, como en las preferencias que se establecen al distribuir los recursos, al fijar los horarios o programar actividades. Ofrecer respuestas satisfactorias a problemas o demandas concretas puede exigir en ocasiones tener la flexibilidad y disposición al cambio como para abandonar o ralentizar otras actividades o servicios que no son tan demandados, por muy tradicionales que sean.

La biblioteca ha de trabajar vinculada con el territorio y sus habitantes. Ha de trabajar en red, no ya con otras bibliotecas del sistema al que pertenece, sino sobre todo buscando complicidades con otros agentes locales, sean centros educativos, asociaciones culturales o colectivos de inmigrantes. Y también hay que superar cierta tendencia, explícita en algunos bibliotecarios, a sentirse como un servicio independiente del ayuntamiento (o de la institución de la que depende), al margen del resto de los servicios municipales. Es importante que la biblioteca

participe de manera constructiva en los proyectos globales o transversales del ayuntamiento, tenga o no un papel relevante en los mismos. Y hay que disponer de mecanismos de participación de los usuarios, no como una mera operación de imagen, sino como una apuesta decidida por nuevas formas de gestión participativa.

Pero lo más importante ante las vicisitudes políticas, es dar continuidad a los proyectos, interiorizar y exteriorizar que trabajamos a medio, no a corto plazo. La planificación es una herramienta de gestión imprescindible que debería integrarse en todas las operaciones de la biblioteca. Desarrollar planes estratégicos a medio y largo plazo es no solo un eficaz instrumento de gestión, sino también una vacuna que inmuniza contra los avatares en que a veces se mueve la vida política. Para ello es imprescindible que en la planificación se impliquen los representantes políticos, así como otros funcionarios y responsables de la comunidad, que el plan sea aprobado formalmente y signifique un compromiso público de actuación ante la ciudadanía por parte de la biblioteca y de la institución que la mantiene.

También la crisis económica nos obliga a los bibliotecarios a no pocas reflexiones y a esforzarnos por generar alternativas viables. Se está superando la aversión o desinterés que muchos profesionales manifestaban tradicionalmente por los aspectos económicos, solo parejos con su prevención ante cualquier implicación política de su actuación. En la actual situación de evidentes dificultades económicas para todas las administraciones y para el conjunto de la sociedad, la primera obligación de los profesionales de las bibliotecas es el aceptarlas, ser y manifestarse sensibles ante los problemas de financiación del servicio público y construir a partir de ahí un discurso con alternativas realistas.

Probablemente la más importante consideración que los bibliotecarios podemos argüir en estas circunstancias es que la biblioteca ha de verse como una inversión, no como un gasto. Al igual que los servicios educativos, y precisamente por el perfil educativo que tiene la biblioteca pública, las asignaciones presupuestarias que le destina la administración son una inversión que revierte en la cualificación de los recursos humanos de una comunidad, en las posibilidades de desarrollo individual y colectivo, en el bienestar de los ciudadanos a corto, medio y largo plazo, en el desarrollo equilibrado e igualitario de la comunidad. Evidentemente, desde un punto de vista estricto de contabilidad, las bibliotecas generan anualmente unos gastos corrientes que es preciso financiar, pero la funcionalidad de esos gastos debería ser considerada como una inversión social tan importante como el sistema educativo.

Precisamente la función educativa de la biblioteca está teniendo desde hace unos años una pujanza especial. A la vez que en la sociedad actual se multiplican las posibilidades de acceso a la información y formas de entretenimiento cultural, crecen para los individuos de todas las edades las necesidades formativas y de aprendizaje, no solo tecnológico. Reforzar el papel que las bibliotecas pueden cumplir en el ámbito educativo en un sentido amplio, tal vez resulte en España un perfil novedoso para algunos, por más que es el perfil prioritario en muchos países o que fuera la función primordial que establecía el primer *Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública* de 1949.

Afrontar un reforzamiento de la posición de las bibliotecas ante los posibles cambios políticos no parece tarea fácil, el desencuentro entre bibliotecarios y políticos es un lugar común que tiene una larga tradición.

Y, junto a la función educativa, conviene reforzar el papel de cohesión social que cumplen las bibliotecas. En tiempos de crisis, los peligros de exclusión social aumentan, las personas con dificultades económicas y laborales se incrementan, y las bibliotecas tienen probada experiencia para jugar un importante rol de inclusión entre los distintos sectores sociales. Son precisamente las dos perspectivas, el aprendizaje y la cohesión social, en las que insistía hace unos meses la *Declaración de Murcia sobre la acción social y educativa de las bibliotecas públicas en tiempo de crisis* (disponible en http://brmu.blogspot.com).

Así mismo es necesario incrementar el trabajo en cooperación. Cooperar significa o debe significar que uno más uno sumen tres, que se puedan conseguir resultados inalcanzables de manera individual, incluso superiores a la suma aritmética de las individualidades que cooperan. Sumar esfuerzos con otros agentes de la comunidad puede conllevar en muchas localidades, especialmente las medianas o pequeñas, que las bibliotecas asuman en ocasiones un papel de liderazgo para el que cuentan con los activos de su implantación social y su continuidad.

Por supuesto, la cooperación bibliotecaria que permita rentabilizar recursos resulta hoy inexcusable. Aún existen territorios enteros, incluso numerosas ciudades en que la superposición de redes bibliotecarias o la escasa articulación de las mismas generan una duplicidad de tareas que si en cualquier circunstancia ya sería difícil justificar, en tiempos de crisis puede aparecer como un derroche innecesario.

A la vez, es preciso realizar serios esfuerzos por incrementar las fuentes de financiación de las bibliotecas públicas. Evidentemente, tal vez no sea la época más idónea para conseguir patrocinadores que aporten financiación para servicios concretos, proyectos o actividades de la biblioteca. Pero ello no es excusa para no trabajar decididamente en esa perspectiva y generar dinámicas en las que resulte atractivo apoyar a la biblioteca. De forma similar, puede haber proyectos o actividades que cuenten con la participación voluntaria de miembros de la comunidad; existen ya experiencias en las que la aportación de voluntarios ha permitido poner en marcha proyectos que hubieran sido difícilmente sostenibles en términos económicos, incluso asociaciones de amigos de la biblioteca que asumen como función prioritaria buscar apoyos financieros para la biblioteca. Por lo demás, el apoyo presupuestario de las administraciones superiores resulta imprescindible para la gran mayoría de los ayuntamientos; sin embargo, son mayoría las diputaciones provinciales cuya aportación al servicio de biblioteca pública es muy escasa o prácticamente nula; y el sistema de financiación del servicio que ejecutan la mayoría de los gobiernos autonómicos es, cuando menos, sumamente desequilibrado al destinar la gran mayoría de los recursos a financiar las pocas bibliotecas que gestionan directamente en unas pocas ciudades.

Nuestro sector adolece tradicionalmente de un cierto victimismo que es necesario vencer, no sólo porque en nada ayuda a superar la actual situación, sino también porque cada vez se corresponde menos con la realidad.

Por último, hay que mejorar en eficacia y en eficiencia. Hay que gestionar mejor los recursos, tratar de obtener los mejores resultados con los recursos menos costosos. En esta perspectiva, los bibliotecarios deberemos preocuparnos cada vez más por mejorar la gestión del que es nuestro recurso más valioso: nuestro trabajo. Es decir, esforzarnos por incrementar los niveles de productividad de nuestro trabajo, para lo cual tenemos en la tecnología un valioso apoyo.

Y todo ello, a la vez que se hace, hay que explicarlo, hacer visible que lo hacemos y cómo lo hacemos. Por otra parte, en determinados niveles será preciso iniciar una profunda y valiente reflexión sobre la eficacia de determinados modelos del servicio de biblioteca pública, hasta encontrar alternativas de sostenibilidad no solo para el próximo año o los próximos cuatro años, sino también en una perspectiva a largo plazo.

En definitiva, las dificultades económicas que la crisis está generando en el servicio público y la proximidad de unas elecciones municipales y autonómicas producen una lógica incertidumbre en el ámbito profesional de las bibliotecas. Pero, lejos de paralizarnos, la situación hay que afrontarla con decisión, cogiendo al toro por los cuernos hasta ser capaces de formular alternativas tan realistas como ilusionantes, tan cercanas a los ciudadanos como imaginativas. Si a estas circunstancias añadimos la profunda y creciente transformación en el uso que los ciudadanos hacen de la información, la reflexión y los posibles cambios que debemos afrontar los bibliotecarios son, sin duda, de gran calado. Y no es ni será tarea fácil. Será tan difícil como estimulante. ■

Ficha Técnica

AUTORES: Bailac, Assumpta (Gerente del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona) y Hernández, Hilario (Director del Departamento de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez).
TÍTULO: Recortes y oportunidades. Las bibliotecas y sus profesionales ante unas elecciones en época de crisis.
RESUMEN: En esta época de crisis en la que estamos inmersos y con las elecciones municipales y autonómicas ya muy próximas, es innegable que se avecinan grandes cambios en la biblioteca pública. En este artículo se habla de cuáles son esos cambios y de cómo los profesionales podemos crear alternativas realistas que ayuden a afrontar la situación con decisión. Así, es necesario vencer el posible victimismo, llevar a cabo acciones de comunicación y visibilidad de las bibliotecas, trabajar en colaboración o reforzar el papel social que cumplen estas instituciones.
MATERIAS: Bibliotecas Públicas / Crisis Económicas / España.